



**InSight
Crime**

ANALYSIS AND INVESTIGATION
OF ORGANIZED CRIME

La batalla por Apure: el chavismo y las ex-FARC

InSight Crime



Tabla de contenidos

La invitación a la guerra en Venezuela	3
El presidente y las guerrillas.....	4
La guerra de Colombia en tierras venezolanas.....	7
La guerra subsidiaria en Apure.....	11
<i>Como en casa en Venezuela:el surgimiento de la Segunda Marquetalia.....</i>	12
<i>El Frente 10: herederos de las FARC en Apure.....</i>	16
<i>Las guerras dentro de la guerra.....</i>	19
El Ejército venezolano: derrotado y superado.....	22
<i>Venezuela tiene una muestra de la guerra de guerrillas</i>	23
<i>Las retiradas del ejército</i>	26
<i>El precio de la derrota</i>	27
Las repercusiones de Apure y el enemigo interno.....	30

1

La invitación a la guerra en Venezuela



En las fotos se veían cinco cadáveres tendidos en el suelo, cada uno con una mano extendida, cerca de la cual había una pistola o una granada. El informe oficial indicaba que se trataba de guerrilleros que murieron en combate con las fuerzas de seguridad. Pero las heridas que se apreciaban en las fotos no eran como las que se sufren en combate. Según expertos forenses comisionados por Human Rights Watch (HRW), existía evidencia de que tanto los cuerpos como las armas habían sido puestos. Los testimonios recogidos por HRW señalan que las víctimas fueron sacadas de sus casas con camisetas que les cubrían la cabeza, y que luego fueron subidas a camiones blindados.

“Querían mostrarle al presidente y a los mandos que habían matado guerrilleros. Pero la verdad es que no mataron a ningún guerrillero; fue a mi familia a la que sacaron de su casa”, le dijo a InSight Crime un familiar de las víctimas, quien no quiso que su nombre se revelara por temor a represalias.

Los asesinatos tenían todas las características de falsos positivos, como se les denomina en Colombia: civiles muertos vestidos con uniforme de guerrilleros marxistas. Entre 2002 y 2008, el ejército colombiano, [presionado por mostrar resultados](#), asesinó a unos [6.400 civiles inocentes](#), a los cuales vistieron como guerrilleros con el fin de presentarlos como muertes en combate.

Pero este caso no ocurrió en Colombia, sino en Venezuela. Y no en el pasado, sino en el presente.

Las presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en marzo de 2021 en el estado fronterizo de Apure. Se produjeron pocos días después de que el ejército venezolano lanzara grandes operaciones militares contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizadas, cuyas disidencias son conocidas como la [ex-FARC Mafia](#). A medida que los combates se intensificaron, Apure siguió padeciendo los horrores de la guerra de guerrillas de Colombia: desplazamientos masivos, tiroteos y emboscadas, secuestro de soldados, minas antipersona y acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad.

Durante décadas, [Venezuela ha reprochado a Colombia](#) porque el conflicto civil del país llevó a que cientos de miles de colombianos desesperados se trasladaran al país vecino. Sin embargo, hoy en día, el flujo de criminalidad y desplazamiento se mueve en dirección contraria. La guerra en Colombia fue el producto de complejos factores sociales, políticos, económicos y criminales que se sucedieron durante varias generaciones; por su parte, el gobierno de Venezuela invitaba a las facciones beligerantes al país.

El presidente y las guerrillas

Durante décadas, tanto el conflicto armado como el crimen organizado de Colombia se han ido filtrando poco a poco a través de la frontera con Venezuela. Pero la invitación de ingreso a la guerrilla colombiana fue hecha por el expresidente Hugo Chávez, el fundador de la “Revolución Bolivariana”.

Hay [evidencia](#) de que las FARC se acercaron a Chávez como un posible aliado político después de que el entonces teniente coronel del ejército liderara un intento de golpe de Estado en 1992. Sin embargo, fue después de que llegó a la presidencia en 1999 que la relación comenzó en serio.

Las comunicaciones incautadas a las FARC indican que desde el año 2000 la guerrilla se comunicaba directamente con quien [se convertiría](#) en su principal interlocutor con el gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Chávez que pasaría a ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia, entre otros roles.

“Reitero mi disposición a cooperar, lo que constituye, como he dicho, una obligación revolucionaria y una cuestión de afecto personal”, escribió Chacín a un comandante de las FARC en 2001.

Sin embargo, los acontecimientos del año siguiente llevaron a que dicha cooperación política se convirtiera en toda una alianza estratégica. En primer lugar, en abril de 2002, Chávez fue derrocado temporalmente mediante un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. En Colombia, el candidato de derechas Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente, quien prometió arremeter contra los guerrilleros marxistas utilizando todo el poder del ejército nacional, con el [financiamiento de Estados Unidos](#).

Tras el golpe, y decidido a aferrarse al poder, Chávez vio a los guerrilleros de las FARC como una herramienta estratégica, un apoyo contra la intervención extranjera de una Colombia cada vez más hostil y de su patrón militar, Estados Unidos. Las FARC, obligadas a defenderse debido al ataque militar de Uribe Vélez, vieron en Venezuela [un refugio seguro](#), un lugar para esconderse y planificar operaciones.

En los años siguientes, los militares venezolanos comenzaron a hacerse los de la vista gorda frente a la presencia de la guerrilla, e incluso empezaron a ayudar activamente a los guerrilleros.

“El gobierno los apoyó mucho, en todos los sentidos: armas, medicinas y camionadas de alimentos”, dijo a InSight Crime en la región fronteriza un exlíder del partido político de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El líder político, quien no quiso que su nombre fuera divulgado por temor a persecuciones políticas, dijo que, durante su trabajo político con el PSUV, visitó varios campamentos de las FARC y se reunió con comandantes guerrilleros de la zona.

De acuerdo con las comunicaciones incautadas a las FARC y las investigaciones de Estados Unidos, detalladas en numerosas acusaciones y listas de sanciones, diversas figuras de alto rango dentro de la administración Chávez comenzaron a cooperar directamente con la guerrilla. Presuntamente les proporcionaron a los guerrilleros seguridad y [documentos de identificación falsos](#) para que pudieran operar libremente en el país, solicitaron su ayuda para [ofrecer entrenamiento militar](#) a las fuerzas de seguridad y grupos de milicias leales a Chávez, [lavaron dinero de la guerrilla](#) y [proporcionaron armas a sus combatientes](#).

Lo más grave de todo es que las FARC, los militares y los principales miembros del gobierno de Chávez comenzaron a cooperar en el tráfico de drogas, según evidencias que se hicieron públicas en las [acusaciones de Estados Unidos](#), así como en las [listas de sanciones](#) y los [testimonios](#) de exfuncionarios chavistas de alto rango que se convirtieron en informantes. Estas versiones fueron confirmadas por numerosas fuentes que hablaron con InSight Crime, como generales retirados del ejército, exlíderes del PSUV y del Partido Comunista de Venezuela, exfuncionarios del gobierno de Chávez, exdiplomáticos nombrados por Chávez, así como residentes y trabajadores de derechos humanos en la región fronteriza.

Chávez, decidido a mantener la unidad política y el apoyo de las fuerzas armadas a toda costa, permitió que esto sucediera.

“Para Chávez, la única manera de mantener la lealtad y conservar el poder era ser permisivo, por lo que permitió que muchos miembros del ejército y funcionarios públicos de su gobierno se involucraran en el tráfico de drogas”, dijo a InSight Crime Mildred Camero, exdirectora de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) durante el gobierno de Chávez.

“Le dije al presidente Chávez lo que estaba sucediendo. Le presenté un informe al respecto, y ¿cuál fue la respuesta? Me expulsaron”, agregó.

Hasta la fecha, la lista de chavistas sancionados o acusados por Estados Unidos por presuntos vínculos con las FARC [incluye](#) exvicepresidentes, ministros de gobierno, jefes de inteligencia, diplomáticos, comandantes militares y gobernadores estatales. Entre ellos se encuentra el sucesor elegido a dedo por Chávez, el actual presidente [Nicolás Maduro](#).

El resultado de esta cooperación fue un flujo de guerrilleros hacia Venezuela. Hacia 2010, [la inteligencia colombiana estimaba](#) que había 1.500 guerrilleros de las FARC asentados en Venezuela, además de combatientes de otra insurgencia izquierdista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El estado Apure se convirtió en una de las principales bases operativas de ambos grupos. [Tres de las siete divisiones](#) de combate de las FARC, conocidas como bloques, estaban activas en la región fronteriza. Entre ellos se encontraba el Bloque Oriental y su Frente 10.

Una vez establecidas en Venezuela, las FARC realizaron operaciones criminales y militares, y comenzaron a replicar el trabajo social y político local que realizaban en Colombia. Ya sin el peligro de ser atacados, pudieron empezar a hacer parte de la vida comunitaria.

“Hemos aprendido a convivir con la guerrilla. Incluso los ganaderos con cierto dinero y poder se han convertido en sus aliados”, dijo un ganadero de Apure, quien no quiso dar su nombre por razones de seguridad.

Las FARC no solo coexistieron con las comunidades locales, sino que además se establecieron como las autoridades de facto, brindando seguridad y estabilidad allí donde el Estado no lo hacía.

“La guerrilla no interfiere con los ciudadanos de la zona. Los guerrilleros se meten con los que roban, los que matan, los que se meten con ellos, los que informan sobre ellos”, dijo el ganadero.

La guerra de Colombia en tierras venezolanas

En 2016, los líderes de las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se comprometieron a desmovilizar sus ejércitos, luego de diversas negociaciones en las que Venezuela cumplió un papel vital como interlocutor y garante.

Para entonces, ya se habían formado varios grupos disidentes de las FARC. Algunos de los más importantes ya se encontraban consolidando el control de los antiguos territorios de la organización, así como las economías criminales en Venezuela. En las regiones de Apure controladas por las FARC, según cuentan los residentes, la desmovilización no produjo muchos cambios. Al igual que antes, el Frente 10 seguía siendo dominante.

Sin embargo, tras esa continuidad en el territorio se oculta una realidad más volátil. La alianza estratégica relativamente estable y mutuamente beneficiosa que surgió entre las FARC y el Estado venezolano durante el mandato del presidente Hugo Chávez se ha resquebrajado debido a disputas entre facciones y a las volubles alianzas. Con el aumento de las tensiones, a fines de 2020 el presidente Maduro declaró que el Frente 10 había abusado de la hospitalidad de Venezuela.



Tras un primer asalto en septiembre de 2020, el ejército realizó, a fines de enero de 2021, la primera de una serie de operaciones destinadas a expulsar al Frente 10 del país. Como ha sucedido muchas veces en Colombia, los combates degeneraron rápidamente en violaciones contra los derechos humanos de la población civil.

Aunque hasta febrero se presentaron [varias refriegas](#), la primera gran operación de la campaña se realizó el 21 de marzo, cuando los militares lanzaron [un ataque](#) contra el campamento de uno de los líderes del Frente 10, Fabián Guevara Carrascal, alias “Ferley”.

Tras la ofensiva, [al menos 2.800 venezolanos](#) huyeron de sus hogares para escapar de los combates y buscaron refugio en Colombia. Muchos huyeron porque los guerrilleros, que al parecer fueron avisados sobre las operaciones, les advirtieron sobre el conflicto que se avecinaba, según contaron los residentes a InSight Crime.

“Un pastor [de la comunidad desplazada] me dijo: ‘los guerrilleros mismos vinieron y nos dijeron que nos fuéramos porque el gobierno venía en camino y podría pensar que éramos guerrilleros, nos atacarían y nos masacrarían’”, dijo el sacerdote de un municipio cercano, quien pidió que su nombre se mantuviera en reserva por temor a represalias.

Al parecer, los guerrilleros se habían dispersado en las montañas. Pero también se habían protegido durante su retirada. Al día siguiente del ataque, [según informes oficiales](#), dos soldados murieron y 9 más resultaron heridos por minas antipersona colocadas por las ex-FARC. Si bien las minas antipersona han sido por mucho tiempo una de las tácticas preferidas por la guerrilla en Colombia —lo que lo convierte en [uno de los países con más minas de este tipo](#) en el mundo—, este fue el primer incidente registrado en Venezuela desde 2013, año en el que se declaró un [país libre de minas antipersona](#).

A medida que la búsqueda de los guerrilleros se hizo más intensa, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, que se sabe que [han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales](#), se unieron a dicha persecución. Según testimonios [recogidos por HRW](#), las FAES allanaron casas en la ciudad fronteriza de La Victoria y en sus alrededores, en donde sacaron a los residentes de sus viviendas, los arrojaron al suelo, los golpearon y los amenazaron de muerte.

Finalmente, llegaron a la casa de Luz Dey Remolina y su esposo, Emilio Ramírez Villamizar. Se llevaron a la pareja junto con su hijo Yefferson y el hermano de Emilio, Ehiner. Horas después, la familia, junto con una quinta víctima, Julio César Jiménez Millán, aparecieron en las fotos de las FAES como “muertes en combate”.

Los tres hombres de la familia Ramírez eran jornaleros agrícolas, que hacían cualquier trabajo que pudieran conseguir en las fincas de la zona, y Luz Dey era ama

de casa, según un miembro de la familia que habló con InSight Crime. Julio César había llegado a Apure pocos días antes para tomar un trabajo en una panadería, como contaron habitantes del sector a InSight Crime.

Al día siguiente, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre 1.000 y 1.200 venezolanos más huyeron hacia Colombia. El flujo de refugiados continuó aumentando y llegó a los 5.877, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), una iniciativa liderada por la ONU. Sin embargo, esta cifra quizá está subestimada, ya que muchos se quedaron donde amigos o familiares y no se registraron ante las autoridades.

Muchos de los desplazados regresaron poco después a Venezuela, pero algunos descubrieron que las fuerzas de seguridad habían saqueado sus hogares, como dijeron a InSight Crime residentes locales y líderes políticos y comunitarios. En un municipio, ni siquiera la iglesia escapó a los ataques, según el sacerdote del pueblo que habló con InSight Crime.

“Entraron a la iglesia, que estaba cerrada, pero derribaron la puerta”, dijo. “Entraron y se llevaron todo, incluso la caja de donaciones del sacerdote, la abrieron y se robaron el dinero que había adentro”.

Después de ese primer asalto del ejército, las ex-FARC se reagruparon y comenzaron a lanzar contraataques. Y a la par que aumentaban la presión sobre las fuerzas de seguridad, también incrementaban los abusos sobre la población, a la que veían como colaboradores de la guerrilla.

Los agentes de seguridad comenzaron a ir tras los habitantes y, al parecer sin pruebas, órdenes judiciales, cargos ni ningún debido proceso, los acusaron de ser informantes de la guerrilla y comenzaron a detenerlos.

“En ese momento yo no entendía por qué me habían detenido, así que le pregunté al capitán que me arrestó y me dijo que me habían llevado allí porque alguien había dicho que yo estaba pasando información a las FARC, y que tenía que hablar y decir la verdad”, dijo una mujer que fue detenida y más tarde liberada, y cuyo nombre no revelamos por razones de seguridad. “no tienes derechos’, me dijo”.

En algunos casos, las personas detenidas fueron golpeadas e incluso torturadas, según múltiples relatos recopilados por InSight Crime y diversas organizaciones de derechos humanos.

Aunque se desconoce el número total de detenidos, el 5 de abril el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que para ese momento se había hecho el arresto de 33 personas, 14 de las cuales serían juzgadas en un tribunal militar acusadas de traición a la patria. Después de eso han surgido informes de nuevas detenciones de ganaderos y trabajadores agrícolas acusados por los militares de colaborar con las ex-FARC.

Esta serie de abusos dejó claro que, a pesar de haber sido testigos de la guerra en Colombia, los militares venezolanos no habían aprendido de la experiencia de su vecino. Allí, los ataques militares indiscriminados, las violaciones a los derechos humanos y la estigmatización de las poblaciones civiles obligadas a convivir con la guerrilla han fortalecido durante décadas a los insurgentes, al deslegitimar al Estado. Y ahora, dicen los habitantes de Apure, lo mismo está sucediendo en Venezuela.

“Los residentes se sienten más seguros con la guerrilla. Ahí hay una relación que se remonta a años atrás; la guerrilla no interfiere con ellos, pero el gobierno sí”, dijo un líder religioso en la ciudad fronteriza de El Amparo, quien no quiso que se divulgara su identidad por razones de seguridad.

La credibilidad del Estado en las comunidades fronterizas en lucha contra el Frente 10 también está tensa debido a una verdad que es demasiado evidente para quienes viven en la región, y que tiene que ver precisamente con las razones por las que el gobierno lanzó la campaña: si bien el Estado finalmente está atacando a los grupos guerrilleros en Apure, es bastante claro que no los está atacando a todos.

“Todos estaban unidos”, dijo el ganadero. “[Ahora] algunos guerrilleros tienen una relación directa con el gobierno venezolano, pero los otros no”.

2

La guerra subsidiaria en Apure



Los combates que estallaron en el estado Apure, en Venezuela, a principios de 2021 fueron en apariencia un clásico conflicto guerrillero. El ejército nacional recibió la misión de liberar a la región de “terroristas” y fue desplegado contra un pequeño grupo de insurgentes, que afirmaban estar luchando por sus ideales izquierdistas. Pero detrás de esta fachada había diversos actores estatales y del hampa que buscaban acceso a su propia porción de riqueza y poder.

Cuando el gobierno venezolano anunció operaciones militares cerca de la frontera con Colombia en Apure, declaró que su objetivo eran los “terroristas narcotraficantes”, “grupos armados irregulares”, “grupos del crimen organizado” y “criminales sanguinarios”. Pronto quedó claro que estaban hablando de un grupo: los disidentes del Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente desmovilizadas.

La noticia causó confusión. Antes de su desmovilización en 2017, las FARC habían cooperado estrechamente con el gobierno venezolano, y el Frente 10 no solo se había apoderado sin problemas del antiguo territorio de las FARC en Apure, sino que

también había mantenido las conexiones y alianzas de los guerrilleros tanto con las comunidades de la región como con las estructuras militares y políticas locales. En Apure, la gente los consideraba aliados del Estado y, sin embargo, el Estado ahora los estaba atacando.

No se pueden conocer las motivaciones exactas del presidente venezolano Nicolás Maduro para ordenar el asalto contra el Frente 10. Sin embargo, lo que está claro es que, desde la desmovilización de las FARC, Apure se había convertido en un polvorín de intereses contrapuestos, donde diferentes facciones de los militares y el movimiento político chavista gobernante estaban enfrentándose, y una guerra fría de la guerrilla estaba comenzando a calentarse.

Como en casa en Venezuela: el surgimiento de la Segunda Marquetalia

La historia del actual conflicto en Apure no comenzó con una ideología o una revolución, sino con los egos, la codicia y la ambición frustrada desatadas por la fundación de la Segunda Marquetalia, un grupo de las ex-FARC, en 2019.

Los dos principales fundadores del grupo, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, se encontraban entre los comandantes más conocidos y venerados de las FARC antes de la desmovilización de los insurgentes en 2017.

Márquez era visto como el segundo miembro más antiguo del Secretariado de las FARC. Santrich era miembro del Estado Mayor Central, el grupo de líderes del que se elegía a los miembros del Secretariado. Ambos eran principalmente figuras políticas, dedicadas a conseguir apoyo, alianzas y redes en el país y en el extranjero.

Cuando las conversaciones con el gobierno colombiano comenzaron formalmente en 2012, las FARC enviaron a ambos hombres a La Habana, Cuba, como parte de la delegación encargada de negociar la paz. Márquez fue el principal negociador. Después de la firma del acuerdo final, ambos se convirtieron en congresistas del nuevo partido político, la FARC.

Sin embargo, en abril de 2018, [durante una controvertida operación encubierta de la DEA](#), Santrich fue arrestado y acusado de intentar negociar un cargamento de cocaína de diez toneladas. Después de que Santrich fue liberado, arrestado nuevamente, y liberado una vez más, tanto él como Márquez desaparecieron.

Reaparecieron en [un video](#) emitido en agosto de 2019. Rodeados por algunos de los principales comandantes militares de las FARC, anunciaron su regreso a la lucha armada bajo la bandera de la Segunda Marquetalia, llamada así por el mítico

lugar donde nacieron las FARC inicialmente. Si bien Márquez afirmó que estaba en Colombia, el ejército colombiano dijo que quizá el video había sido filmado en Venezuela.



EX-FARC MAFIA /

La Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia fue conformada en 2019 por comandantes militares desmovilizados y dirigentes políticos de las FARC desilusionados ante el fracaso del gobierno colombiano de implementar los acuerdos de paz y por el temor de enfrentar la persecución judicial.

El nuevo grupo revivió antiguas células combatientes de las FARC, cooptó redes disidentes existentes e incluso creó nuevas células en todo el territorio colombiano. Dichas células responden a las órdenes del comando central, acuartelado en Apure, Venezuela, pero es probable que en la mayoría de los casos sean autónomos mayormente en sus operaciones de rutina. Pese a lo anterior, aunque la Segunda Marquetalia logró tomar el control de zonas de importancia estratégica para economías criminales, como el narcotráfico, ha tenido problemas para hacer acopio de poderío militar o para asegurar el control sobre territorios extensos.



Cabecilla: Luciano Marín alias "Iván Márquez"

Zonas de influencia en Colombia



insightcrime.org

Septiembre 2021

Fuente: Fundación Conflict Responses (CORE): "Las caras de las disidencias, cinco años de incertidumbre y evolución"; Investigaciones de InSight Crime.

“Esta es la continuación de la lucha guerrillera como respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de La Habana”, declaró Márquez.

Inicialmente, Márquez y Santrich pretendían unirse a los disidentes de las FARC liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, quien **había estado intentando** unificar las numerosas facciones de las ex-FARC en todo el país bajo su mando.

Duarte también había sido parte de la primera delegación de paz enviada a Cuba. Pero luego, en 2016, la comandancia guerrillera lo envió al departamento del Guaviare para restablecer el orden después de que un frente de las FARC se distanciara del proceso de paz y se sublevara. Duarte, en cambio, desapareció con US\$1,35 millones en efectivo de la guerrilla y se unió a los disidentes, convirtiéndose en uno de sus líderes más antiguos y visibles.

En un relato confirmado por inteligencia colombiana, el tercero al mando de Duarte, alias “Jonnier”, describió la cumbre ante la Fundación Paz y Reconciliación, grupo colombiano dedicado al monitoreo de conflictos. Según el líder guerrillero, lo que Márquez deseaba era arrebatárle las riendas a Duarte.



EX-FARC MAFIA

Red de disidencias de Duarte

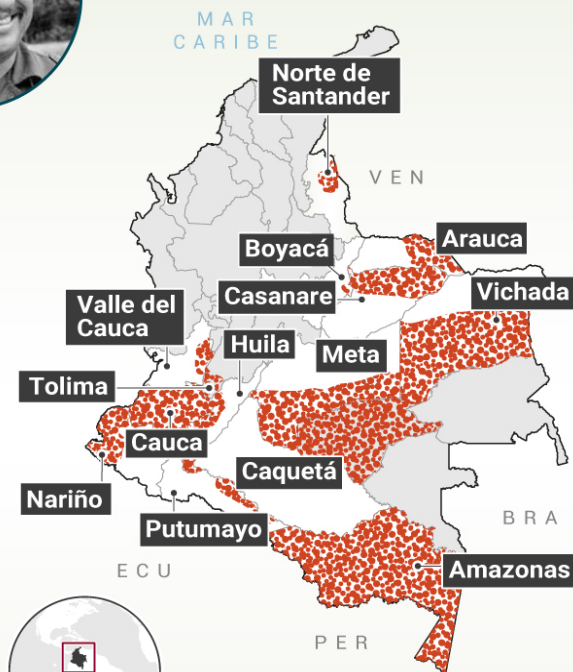
Desde que se desvinculó del proceso de paz de las FARC cuando aún estaban los diálogos, Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, ha logrado construir la red más extensa y fuerte de las antiguas FARC que se encuentra activa actualmente.



Cabecilla: Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”

La red de disidencia no es una estructura jerárquica, unificada, sino un paraguas en el que el mando central coordina células de ex-FARC independientes en su mayor parte que se encuentran dispersas por toda Colombia. Algunas, como los bloques de las antiguas FARC comandados por Duarte y otros altos mandos, controlan extensas franjas de territorio y mantienen formidables tropas de insurgentes. Otros son pequeñas redes que operan en un reducido número de municipios, por lo general los que son estratégicos para las economías criminales.

Zonas de influencia en Colombia



insightcrime.org

Septiembre 2021

Fuente: Fundación Conflict Responses (CORE): “Las caras de las disidencias, cinco años de incertidumbre y evolución”; Investigaciones de InSight Crime.

“Cuando Márquez llegó, era muy arrogante, quería continuar como comandante de las FARC que habían continuado en resistencia”, dijo. “Le dijimos que no los habíamos llamado para entregarle lo que habíamos logrado rescatar del proceso de paz de las FARC”.

Los intentos de Márquez y Santrich de convencer a otras facciones de las ex-FARC en Colombia para que se les unieran también se vieron frustrados, y la Segunda Marquetalia parecía más bien un ejército guerrillero con muchos comandantes, pero con pocos soldados.

La Segunda Marquetalia basó sus operaciones no en Colombia, sino en Venezuela, donde tanto Márquez como Santrich tenían una larga historia. Durante años habían llevado a cabo trabajo político en el país, donde Márquez trabajaba desde una oficina en Caracas, según las comunicaciones incautadas a las FARC. Establecieron conexiones que llegaban hasta la cima del chavismo, y Márquez se reunió con el presidente Hugo Chávez en 2007.

Incluso antes del anuncio oficial de que iban a retomar las armas, el presidente venezolano Nicolás Maduro había declarado públicamente que Márquez y Santrich eran bienvenidos en el país, tras haber pasado a la clandestinidad, y los llamó “hombres de paz”.

La Segunda Marquetalia se estableció en Apure, estado que había sido utilizado como centro de operaciones de las FARC en Venezuela durante tres décadas. Los residentes de Apure, así como líderes comunitarios, líderes políticos, trabajadores de derechos humanos y exfuncionarios, quienes hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dicen que los guerrilleros establecieron una nueva base de operaciones cerca de la ciudad de Elorza, en el municipio de Rómulo Gallegos.

Las fuentes señalan que, para financiar sus operaciones, recurrieron al narcotráfico, despachando aviones cargados de cocaína que salían de pistas de aterrizaje clandestinas. En ningún momento intervinieron las autoridades venezolanas.

El nuevo grupo guerrillero también habría tenido que allanar el camino con el mayor grupo rebelde que opera en Apure y al otro lado de la frontera, en el departamento de Arauca, Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Varias fuentes informan que los líderes de la Segunda Marquetalia organizaron cumbres con líderes del ELN incluso antes de anunciar la formación del movimiento.

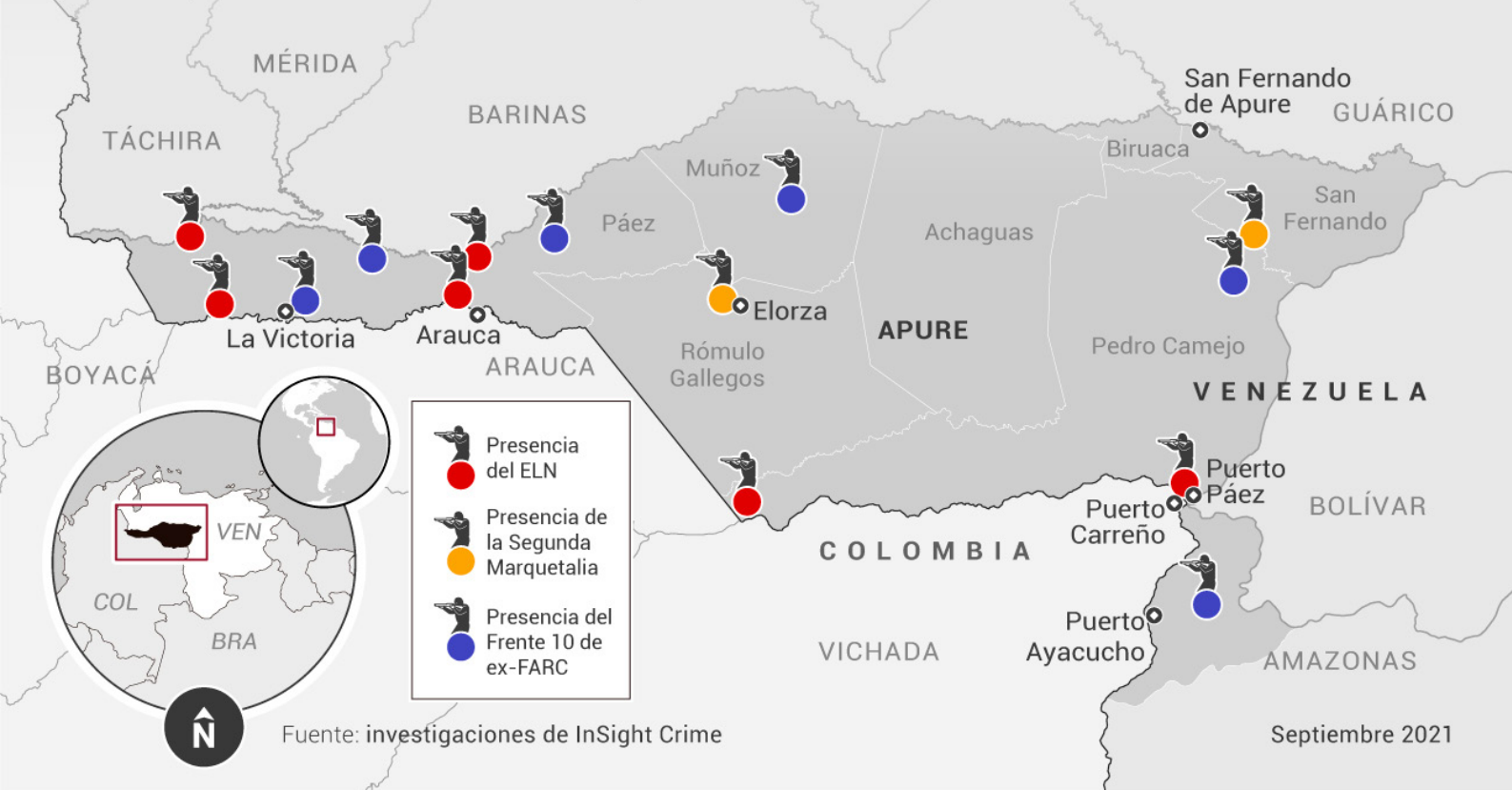
Una vez atrincherados en Apure, y con su negocio de drogas ya en funcionamiento, la Segunda Marquetalia buscó una vez más expandirse y reclutar a otras facciones de las ex-FARC. Si bien no podían competir con Duarte en cuanto a fuerza militar y presencia territorial, sí tenían conexiones políticas y dinero.

Sin embargo, había un problema: la Segunda Marquetalia no era la única guerrilla en Apure que reclamaba el nombre de las FARC. También estaba el Frente 10, un grupo disidente de las FARC que estaba aliado con la red de Gentil Duarte.

Presencia de guerrillas en Apure

insightcrime.org

* Este mapa muestra las ubicaciones aproximadas donde se sabe que operan estos grupos. No representa necesariamente las ubicaciones específicas de sus fuerzas.



El Frente 10: herederos de las FARC en Apure

Mientras Márquez y Santrich intentaban reconstruir las FARC desde la cima, el Frente 10 había estado tratando de reconstruirse en Apure desde la base. Y en tanto la Segunda Marquetalia había heredado las conexiones políticas de alto nivel de las FARC en Venezuela, el Frente 10 había heredado sus redes locales en el terreno.

El frente disidente estaba liderado por Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias “Jerónimo” o “Arturo”. Según defensores de derechos humanos que trabajaron con excombatientes al otro lado de la frontera, en Arauca, durante el proceso de desmovilización, Arturo fue liberado de prisión como parte del programa de amnistía en el proceso de paz.

Sin embargo, Arturo se había peleado con el anterior comandante del Frente 10 de las FARC, y cuando llegó a la región su nombre no estaba en las listas de combatientes desmovilizados.

“[El comandante] dijo que no lo iba a reconocer porque era un desertor y un aliado de grupos paramilitares”, dijo una de las fuentes, que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad. “Así que [Arturo] se puso manos a la obra, reunió gente para establecer una nueva versión del Frente 10”.

Desde el principio, Arturo recibió el apoyo de los disidentes de Duarte, según numerosas fuentes de la región que hablaron con InSight Crime, así como investigaciones de grupos de monitoreo de conflictos y medios locales. Si bien el grupo es en general autónomo en la gestión de sus asuntos a nivel local, el control de los cruces fronterizos le otorgó a Duarte una salida importante para los cargamentos de cocaína.



EX-FARC MAFIA /

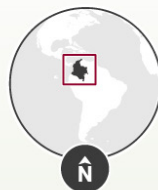
El Frente 10

Las disidencias del Frente 10 fueron constituidas durante el proceso de desmovilización por mandos medios y combatientes que no depusieron las armas o desertaron del proceso de paz.



Cabecilla: Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias "Arturo" o "Jerónimo"

Zonas de influencia en Colombia



insightcrime.org

Septiembre 021

Fuente: Fundación Conflict Responses (CORE): "Las caras de las disidencias, cinco años de incertidumbre y evolución"; Investigaciones InSight Crime.

El nuevo grupo disidente de Arturo, el Frente 10, buscó rápidamente **consolidar el control** sobre los antiguos territorios de las FARC en Apure y Arauca. Intentaron apoderarse de las economías criminales a ambos lados de la frontera.

Para los residentes de Apure, acostumbrados durante mucho tiempo a convivir con la guerrilla, no hubo mucha diferencia entre un momento y el otro.

“Ha habido convivencia [con la guerrilla] durante años; ellos han estado aquí por casi 20 años, desde que Chávez llegó a la presidencia”, dijo un ganadero local, que pidió mantener su nombre en el anonimato por razones de seguridad. “Ambas partes viven aquí y se relacionan”.

A medida que aumentaban sus filas, la guerrilla capitalizó estos lazos comunitarios para reclutar venezolanos, según señala la inteligencia militar colombiana en una publicación de Reuters, así como algunas fuentes de Apure.

“Le ofrecen dinero y comida a las gente para atraerla; muy pocas personas se ven obligados a vincularse”, dijo a InSight Crime el sacerdote de un pueblo en territorio de las ex-FARC, que tampoco quiso que su nombre se divulgara por temor a represalias.

El Frente 10 también mantuvo la histórica alianza de las FARC con los militares de la zona, y ninguna de las partes se esfuerza por ocultar su colusión, según dijeron a InSight Crime múltiples fuentes en territorios controlados por la guerrilla en Apure.

“Los guerrilleros conviven con elementos de las fuerzas armadas como si fueran vecinos”, dijo a InSight Crime un periodista local, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. Otro periodista de la zona describió a InSight Crime cómo en una visita a la ciudad fronteriza de La Victoria se le pidió que comentara sobre un torneo de fútbol con equipos tanto del Frente 10 como del ejército.

Hay evidencia de que la relación fue mucho más allá de la coexistencia pacífica y que los militares y el Frente 10 también cooperaron en las economías criminales. Residentes locales, líderes comunitarios, líderes políticos y un contrabandista de la zona describieron a InSight Crime cómo la guerrilla y los militares estaban dividiendo las ganancias del contrabando transfronterizo.

Sin embargo, si bien la absorción de los territorios y las conexiones locales de las FARC por parte del Frente 10 dio una sensación de estabilidad, la llegada de la Segunda Marquetalia complicó el panorama y se avecinaban problemas.

Las guerras dentro de la guerra

Cuando los dirigentes de la Segunda Marquetalia llegaron a Apure, Duarte —y por lo tanto el Frente 10— ya había rechazado sus propuestas. Pero eso no les impidió atraer a miembros clave del Frente 10 que tenían el conocimiento que necesitaban para establecerse en la región.

Uno de sus primeros objetivos fue Robert Abril, alias “Porrón”, un desmovilizado que ejerció como director de finanzas de las FARC, a quien el Frente 10 había presionado, mediante el secuestro de su padre, para que se uniera a sus filas, según narró uno de los trabajadores de derechos humanos en Arauca.

“Llamaron [a Porrón] para que se reuniera con Santrich y Márquez, quienes le dijeron: ‘tú eres uno de los nuestros, puedes ayudarnos, hay dinero, ayúdanos a organizar todo esto’”, cuenta la fuente. “Y entonces le dijo al Frente 10 que no continuaría con ellos, que se iba con Marquetalia”.

La respuesta del Frente 10 ante esta traición consistió en una operación para asesinar a Porrón en La Victoria. Porrón escapó de la redada, pero **seis personas murieron**. El ataque también acabó con la posibilidad de que las dos partes coexistieran en Apure, y mucho menos que se reconciliaran. Y aumentó las tensiones entre la Segunda Marquetalia y Gentil Duarte.

La relación del Frente 10 con el ELN también comenzó a desgastarse, según los trabajadores de derechos humanos. En 2020, **un informe** en los medios de comunicación de Venezuela incluso afirmaba que se habían presentado enfrentamientos armados después de que las ex-FARC se trasladaron a territorio del ELN.

Sin embargo, cuando finalmente se produjo el ataque, no fueron ni la Segunda Marquetalia ni el ELN los que lo efectuaron, sino los militares venezolanos.

El primer ataque se produjo en septiembre de 2020, cuando **el ejército de Venezuela hizo una incursión en los campamentos del Frente 10**. Sin embargo, eso fue solo un preludio de lo que estaba por venir. **A finales de enero de 2021**, los militares iniciaron la primera operación de **una serie de ataques** sin precedentes contra la guerrilla en Venezuela, los cuales continuarían hasta mayo.

El Frente 10 **contraatacó**, apuntando a posiciones y unidades militares. También dejaron en claro a quién culpaban de la violencia: a la Segunda Marquetalia.

En **una grabación de audio** que circuló en el mes de abril, aparentemente grabada por un comandante del Frente 10, se llamaba al diálogo con los militares venezolanos y el gobierno de Maduro, a la vez que se lanzaba una diatriba contra los “traidores a la revolución”, los “vendidos” que “regresaron a las armas sin tener un ejército” y cuyo “único interés es su enriquecimiento personal”.

También se lanzaba una advertencia a los venezolanos:

“Los traidores están contigo desde adentro, caminan a tu lado, comen contigo, los abrazas y los saludas mientras llevan la máscara de un falso revolucionario”, decía la grabación.

Los disidentes de Duarte no tardaron en declarar su apoyo al Frente 10 y se unieron al ataque verbal contra la Segunda Marquetalia, en una declaración en video hecha por Jonnier.

“[La Segunda Marquetalia] quiere proclamarse como los verdaderos revolucionarios, cuando sus acciones hacia quienes permanecemos en la resistencia armada no han sido más que calumnias, engaños y traiciones”, dice.

“Estos hombres financian a unos pocos funcionarios del gobierno venezolano para que hagan su trabajo sucio, para facilitar sus intereses y satisfacer sus apetitos personales de manera desleal y traidora”.

La guerrilla no fue la única en llegar a esta conclusión. InSight Crime habló con numerosas fuentes, entre ellas trabajadores de derechos humanos en Arauca y Apure, líderes comunitarios, políticos y residentes de Apure, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y locales, investigadores y analistas de conflictos en Venezuela y Colombia, y exmilitares venezolanos. Todos coincidieron: los militares venezolanos atacaron el Frente 10 al menos en parte para beneficiar a la Segunda Marquetalia.

“Solo hay una persona con los contactos en los altos niveles de Venezuela que puede levantar un teléfono y llamar a un general para pedirle que bombardee a sus enemigos”, dice el trabajador de derechos humanos. “Si se piensa en quién tendría estos contactos, el único es Iván Márquez”.

“Esta es una lucha entre dos facciones de las antiguas FARC para controlar un territorio que es muy propicio para operaciones ilegales como el narcotráfico”, dijo a InSight Crime un general venezolano retirado. “Las fuerzas armadas venezolanas están apoyando a los más cercanos al presidente Maduro, y por eso permanecen atentas, no para expulsar a un enemigo que está ilegalmente en territorio venezolano, sino para favorecer a un sector de las FARC”.

Otros [informes de prensa](#) indican que también es probable que el ELN hubiera presionado para realizar el ataque después de que el Frente 10 comenzara a invadir su territorio y las economías criminales que controlan, aunque InSight Crime no pudo confirmar esto último con fuentes de la región.

Sin embargo, es poco probable que Maduro despliegue todo el ejército venezolano solamente para resolver las disputas guerrilleras. Las fuentes dicen que quizá

también hubo cálculos estratégicos de mayor alcance.

Otra posible motivación consistía en actuar ante una audiencia internacional que había sido cada vez más crítica frente al evidente apoyo del régimen de Maduro a los grupos guerrilleros. Así lo afirma Iván Simonovis, exdirector de policía, preso político y, recientemente, comisionado especial de seguridad e inteligencia en el autoproclamado “gobierno interino” de la oposición venezolana.

“Creo que el régimen dijo: ‘nos vamos a lavar las manos frente a esto, vamos a neutralizar a este grupo guerrillero y entonces parecerá que estamos combatiendo a la guerrilla, a la vez que les estamos resolviendo este problema al señor Márquez y al señor Santrich’”, dijo a InSight Crime.

Otras fuentes, entre ellas personas que conocen la política interna y las actividades criminales del régimen de Maduro, dicen que el conflicto probablemente también se dio como resultado de las tensiones entre facciones al interior del chavismo.

“Hay una división interna dentro del régimen; algunos apoyan a la Segunda Marquetalia, mientras que hay otro sector que mantiene conexiones con Gentil Duarte y hace negocios con él”, dijo a InSight Crime un destacado exintegrante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que hizo parte de la coalición chavista hasta 2020.

El destino del Frente 10 quedó determinado, según indica la misma fuente, porque se negaron a pagarles más a sus aliados en el ejército venezolano.

“Algunos generales de un sector de las fuerzas armadas les exigieron a estos disidentes aumentar la cantidad de dinero que pagan como una especie de ‘cuota’ por estar en el territorio”, afirma.

Otros informes también apuntan a una mayor frustración de facciones del ejército con respecto al Frente 10 por la repartición de los derechos de extorsión, pues sostienen que los guerrilleros no estaban respetando los territorios acordados.

Si bien estos informes y teorías siguen sin confirmarse, apuntan a una verdad que se estaba volviendo cada vez más evidente para quienes estaban en Apure: mientras que las FARC siempre habían estado dispuestas a seguir las reglas del gobierno a lo largo de la frontera, los disidentes del Frente 10 estaban fuera de su control.

“Se estaban fortaleciendo, ganando dinero y poder, y el gobierno no puede permitir que nadie tenga poder absoluto excepto ellos”, dijo a InSight Crime un contrabandista de Apure con experiencia en la compleja dinámica criminal de la región.

Cualesquiera que fueran las razones, Maduro estaba comprometido y dispuesto a arriesgar su propia reputación y la vida de los soldados venezolanos para atrapar a los guerrilleros del Frente 10 y expulsarlos del país.

3

El Ejército venezolano: derrotado y superado



El 23 de abril de 2021, dos helicópteros del ejército venezolano aterrizaron cerca de la población de La Victoria en el estado fronterizo de Apure, llenos de soldados enviados a perseguir a disidentes de las guerrillas colombianas. Los cazadores no tardaron en ser cazados.

Dos días después, la guerrilla del Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llamaron a un párroco local para que fuera y recogiera los cuerpos de los soldados caídos en la emboscada. Grabaron al sacerdote y a sus ayudantes vomitando por la pestilencia mientras cargaban los cadáveres en un camión. El video se publicó posteriormente en internet.

Varios [observadores de derechos humanos hablaron](#) de 12 cuerpos recuperados, pero el saldo de muertos total puede haber sido aun mayor. Dos días después, los guerrilleros contactaron de nuevo al sacerdote y le pidieron que buscara nuevos cuerpos. Otro párroco de un pueblo vecino, que no quiso ser identificado por temor a represalias, dijo a InSight Crime. “Me llamó a preguntarme qué hacía y le dije ‘no se meta, porque va a salir mal de eso’, relató.

No hubo un reporte oficial sobre el número de muertos. Las autoridades venezolanas ni siquiera admitieron que había ocurrido la emboscada.

“A eso se le echó tierra, hubo muchos más muertos”, afirmó el cura.

Pero hubo algo que no pudieron negar: la guerrilla también capturó a ocho soldados. Dos semanas después del ataque, las antiguas FARC enviaron primero una carta a la Cruz Roja, informando los nombres de los soldados y pidiendo a los organismos internacionales que ayudaran a facilitar su liberación. Luego comenzaron a publicar pruebas de vida en video.

“Hemos sido capturados por las FARC, nos han tratado bien, hemos recibido alimentos, medicinas, y en este momento nos encontramos bien”, decía el teniente coronel Jhan Carlo Bemón en el primero de esos videos. “Creo que esta situación puede resolverse por el diálogo”.

Esto resultaría ser un punto de quiebre en los combates entre el ejército venezolano y el Frente 10, que para ese punto llevaban tres meses. Tras el ataque, aumentaron los reportes de [desavenencias y deserciones](#) en las filas de las fuerzas armadas. Y la guerrilla, después de soportar la campaña militar más agresiva de la historia reciente de Venezuela, ahora tenía rehenes que podía usar como elementos de negociación.

Venezuela tiene una muestra de la guerra de guerrillas

La primera misión militar contra el Frente 10 en Apure se inició en septiembre de 2020, con el objetivo de capturar o dar de baja a Fabián Guevara Carrascal, alias “Ferley”, jefe de finanzas del Frente 10. Aunque el ejército anunció que había asesinado a 15 guerrilleros y destruido tres campamentos de las antiguas FARC, cuatro soldados resultaron muertos y Ferley escapó.

Las hostilidades se reanudaron a finales de enero de 2021, y a lo largo de febrero hubo [enfrentamientos esporádicos](#) entre las fuerzas de seguridad y las antiguas FARC, aunque las autoridades montaron operativos [contra las redes de narcotráfico](#) de esa guerrilla. Pero no fue hasta finales de marzo que se intensificó el conflicto.

El 21 de marzo, el ejército lanzó la “Operación Escudo Bolivariano 2021” con una gran ofensiva en el municipio de Páez. [Según el Ministerio de Defensa](#), el ejército enfrentó a la guerrilla, y capturó a 32 personas, destruyó seis campamentos y mató a un comandante de las antiguas FARC, a la par que perdió dos soldados en combate.

Aunque se presentó como una victoria del ejército, los residentes de la zona, líderes de la comunidad y periodistas de Páez declararon a InSight Crime que la operación fue un fracaso. Para cuando el ejército llegó, la guerrilla ya se había esfumado. Incluso

las capturas no fueron lo que se mostró, pues organizaciones de derechos humanos de inmediato denunciaron al ejército por la detención arbitraria de campesinos y agricultores.

El Frente 10 lanzó el contraataque. En la noche del 23 de marzo, una célula guerrillera atacó una base de aduanas en la población de La Victoria usando explosivos. En los días siguientes, hubo cruce de disparos, bombardeos aéreos por parte del ejército, y ataques guerrilleros contra puestos de las fuerzas de seguridad.

Se multiplicó el número de organismos de seguridad enviados a la región. Los residentes de la población de Guasualito, donde las fuerzas de seguridad instalaron su base de operaciones para la campaña, dijeron a InSight Crime que además del ejército, en el campamento había agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la Policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A mediados de abril, el ejército anunció incluso el despliegue de mil miembros de la fuerza de voluntarios civiles, las milicias bolivarianas, a la región.

El despliegue de soldados, policías, fuerzas especiales, organismos de inteligencia y milicias dio a las fuerzas de seguridad una enorme ventaja numérica. Con sus jets, helicópteros y vehículos blindados, también tenían una enorme ventaja en poder de fuego. Pero el Frente 10, con alrededor de 300 combatientes no planteaba un blanco convencional: estaban ocultos entre la población civil y tenían libertad de movimiento al otro lado de la frontera.

“Pensaron que iban a destruir [al Frente 10 al instante], pero fue lo contrario; cuando el gobierno los atacó desató su ira”, comentó un líder religioso de Guasualito, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad.

Décadas de lucha armada en Colombia le habían dado a los combatientes de las antiguas FARC habilidades en guerras asimétricas, mientras que los años que llevaban operando en Apure implicaban que conocían el terreno local y tenían vínculos estrechos con las comunidades. Eso les dio la inteligencia que los mantuvo un paso por delante de las fuerzas de seguridad.

“Estas personas llevan años trabajando [en Apure] y son amigos de todos los campesinos locales”, señaló un ganadero de Apure, quien solicitó que se mantuviera reserva de su identidad por motivos de seguridad. “La guerrilla sabe cada mínimo detalle de lo que pasa aquí”.

Pero no eran únicamente las comunidades. El ejército destinado a la región estaba acostumbrado a cooperar con el Frente 10, no a combatirlo. Los residentes incluso cuentan cómo ambos bandos hacían patrullas juntos.

La batalla por Apure: Cronología

19 de noviembre

Un operativo militar contra el líder del Frente 10 "Ferley" supuestamente deja 15 guerrilleros y 4 soldados muertos.

31 de enero

Confrontación entre el Frente 10 y las FANB en el municipio de Pedro Camejo, este de Apure, marca el comienzo de la guerra por Apure.

21 de marzo

Las FANB escalan el conflicto con un asalto a posiciones guerrilleras en el municipio de Urdaneta, plaza fuerte del Frente 10, y con la captura de 32 personas acusadas de colaborar con el Frente 10.

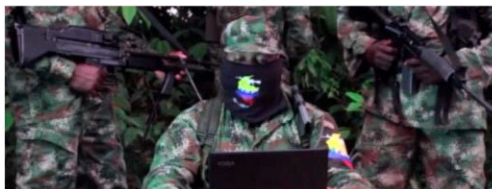
25 de marzo

Las FAES asesinan a cinco residentes de La Victoria y los presentan como guerrilleros caídos en combate.



10 de mayo

El Frente 10 emite un pronunciamiento público en el que anuncian que mantendrán cautivos a varios soldados y piden a los organismos internacionales que medien para su liberación.



insightcrime.org

Septiembre 2021



31 de enero a 13 de febrero

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el Frente 10 en los municipios de Pedro Camejo y Atures en el norte del estado de Amazonas dejan varios muertos y más heridos cuando el ejército y la policía destruyen ocho campamentos guerrilleros y ocho pistas clandestinas, y decomisan 192 paquetes de cocaína.



21 de marzo al 16 de abril

Aproximadamente, 5800 personas son desplazadas de Urdaneta, por los operativos, bombardeos y tiroteos del ejército y los ataques guerrilleros.

23 de marzo

El Frente 10 contraataca las posiciones de las fuerzas de seguridad cerca de La Victoria.

23 de abril

Guerrilleros del Frente 10 emboscan una unidad del ejército en el sector de La Capilla, dejando un estimado de 12 soldados muertos y otros ocho capturados.

28 de mayo

El ejército comienza a retirarse de la zona de conflicto en Urdaneta.



31 de mayo

El Ministerio de Defensa anuncia la liberación de los soldados tomados prisioneros por el Frente 10.

Fuente: medios y reportes oficiales.

“En camiones, a pie, hacían las rondas juntos, porque trabajaban juntos, no peleaban”, comentó el líder religioso.

Después de que se hizo evidente que el Frente 10 había recibido alertas de los operativos militares próximos, la inteligencia militar abrió una investigación sobre las fugas de información y las conexiones entre oficiales del ejército y las antiguas FARC, según un reportaje de El Nacional. Hasta el momento, han sido capturados dos coroneles acusados de colaborar con el frente, mientras que el brigadier general a cargo de la base militar de Guasqualito también fue retirado de su cargo en circunstancias misteriosas.

Las retiradas del ejército

Aunque el Frente 10 hacía quedar en vergüenza al ejército, a la vez estaba buscando una salida del conflicto. En público, convocaron a negociaciones, pero en privado comenzaron a buscar las muchas conexiones políticas que habían hecho a lo largo de años, pidiéndoles que mediaran para buscar una solución.

Según la periodista y experta en temas castrenses [Sebastiana Barráez](#), a comienzos de abril, se organizaron reuniones entre el Frente 10, miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y delegados de otros movimientos políticos que hacen parte de la “Revolución Bolivariana” de Chávez.

Un antiguo miembro del PCV, que solicitó no ser identificado por motivos políticos, confirmó el encuentro entre los insurgentes y los movimientos políticos y señaló que participaron sus contactos personales del PCV. También explicó que el partido había sido convocado por sus nexos de larga data con la guerrilla, especialmente en Apure.

“A lo largo de su historia, el PCV ha mantenido relaciones con las FARC”, explicó. “Hay haciendas en Apure que fueron expropiadas [por el gobierno] y que se entregaron a miembros del PCV para que las cuidaran, las administraran y saldaran cuentas con las FARC, con quienes mantienen relaciones económicas”.

Pero fue solo después de que el Frente 10 capturó a los ocho soldados que la situación comenzó a cambiar.

Al comienzo, el gobierno guardó silencio. Solo hasta el 15 de mayo, el [ministro de defensa Vladimir Padrino López](#) reconoció en público que los soldados habían sido tomados como rehenes, eso es más de tres semanas después de la emboscada. Al día siguiente, el Frente 10 envió otra [prueba de vida en video](#), donde se veía a los ocho rehenes rogando al gobierno que negociara su liberación.

Luego, el 28 de mayo, las fuerzas militares comenzaron a retirarse de la región; los soldados y el armamento fueron retirados y los puntos de control cerrados. Tres días después, [Padrino López](#) anunció la liberación de los rehenes. El ejército los había rescatado, afirmó, en la “Operación Águila Centenaria”. Pero no se dieron detalles de la operación ni entonces ni después, y no hubo información de operativos ni confrontaciones en la zona.

Los [reportes](#) del Frente 10 celebrando en las calles de La Victoria y poblaciones cercanas el retiro de las fuerzas de seguridad se sumaron a la humillación del ejército venezolano.

El precio de la derrota

Los reportes oficiales reconocen 12 muertes entre la operación inicial en septiembre y la retirada del ejército a finales de mayo, mientras que las [noticias de los medios](#) hablan de al menos 20 muertos. Sin embargo, el verdadero saldo de muertes sigue siendo un misterio.

En algunos casos, ni las familias de los soldados enviados a combatir en Apure saben si sus hijos están vivos o muertos. Para algunos, la primera vez que supieron que sus parientes habían desaparecido fue cuando no regresaron a sus hogares después de que se redujo el conflicto.

InSight Crime habló con familiares de dos soldados desaparecidos en el conflicto, El primer sargento Abraham Belisario y el sargento mayor Danny Vásquez, ambos enviados a Apure desde la base naval de Turiamo en el estado de Aragua.

“Descubrí lo que había sucedido por las redes sociales; nadie me dijo nada”, lamentó una familiar de Belisario. Después de eso se dirigió a la sede naval en Caracas en busca de información, y allí fue recibida por un general.

“Me dijo que tuviera mucha fe, que es lo que todos me han dicho: que debo tener fe”, relató.

La familia de Vásquez tuvo las últimas noticias suyas el 21 de abril, cuando los contactó para decirles que les iban a quitar los teléfonos. Dos días después le envió un mensaje a su esposa, pero cuando su familia intentó contactarlo en su teléfono, este estaba apagado.

Un mes después el oficial al mando de Vásquez visitó la residencia familiar para devolver su teléfono y otras posesiones. Pero no les dio información sobre el paradero de Vásquez.

“Cuando le escribí [al oficial] no me respondió, simplemente me dijo que no tenía información”, comentó un pariente. “Le pregunté si aún lo estaban buscando y me dijo que sí, que había un teniente comandante en el caso, pero eso fue lo único que me dijo”.

El personal del ejército en Apure no tenía ni el adiestramiento ni el equipo para un conflicto en el terreno y contra un enemigo como el que iban a enfrentar. Algunos de los soldados enviados a la región, incluido el desaparecido Danny Vásquez, no tenían más de 15 días de adiestramiento especial en Caracas para prepararse para lo que les esperaba en Apure.

El Frente 10 puso en evidencia la degradación de la capacidad del ejército venezolano, no solo por el abandono, sino también porque el gobierno lo convirtió en un instrumento político, cuyo principal objetivo no es defender el país, sino mantener el régimen chavista, comentó un general retirado del ejército, que habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato.

“Las fuerzas armadas tienen la moral baja, porque han sido usadas, ideologizadas y politizadas”, agregó. “Han perdido su objetivo, su razón de ser”.

Cuando se hizo evidente que el ejército se estaba ahogando en un conflicto letal, los soldados comenzaron a desertar de sus puestos. A mediados de abril, [El Nacional informó](#) que el ejército había emitido 21 órdenes de captura para los desertores.

Después de la emboscada del 23 de abril, los índices de deserción [aumentaron aún más](#), según informaciones de prensa, y el descontento en las filas comenzó a desbordarse, según evidenciaron grabaciones en audio de soldados anónimos que comenzaron a [circular](#) en las redes sociales.

“¡Qué rabia! Ni siquiera sé qué pensar”, decía uno de ellos.

Pero no eran solo las condiciones y los riesgos lo que desmoralizaba a las tropas, afirman antiguos militares. Las tensiones también escalaron cuando se hizo claro que la pretensión del gobierno de que estaban defendiendo el país de “terroristas” era poco más que una fachada.

“Los enviaron [a Apure] con el argumento de que iban a combatir un enemigo que estaba penetrando el territorio nacional”, comentó el general. “Pero cuando [los soldados] se dieron cuenta de que iban a combatir a una facción de las FARC para beneficiar a otra facción de las mismas FARC, entonces no había más posibilidad de que creciera la convicción de que no querían ir a luchar”.

Para el presidente Maduro, [que depende de la lealtad de las fuerzas militares](#) para aferrarse al poder, el conflicto lo dejó en una posición precaria, pues los soldados comenzaron a preguntar lo que no tenían permitido preguntar, una pregunta que planteó un exsoldado que residía en Apure.

“Cuando vean que es un fraude, que no es claro por qué están luchando, y que hay personas que se benefician particularmente de este conflicto, un soldado se va a hacer la pregunta ‘¿por qué mi vida?’”.

A pesar de los rumores de descontento en las filas después de la humillante experiencia del ejército en el campo de batalla, se ha mantenido la campaña del estado contra el Frente 10.

Por el momento, han cambiado las tácticas, pues el ejército ha evitado la confrontación directa con la guerrilla, y en lugar de eso se ha lanzado contra las comunidades que dieron a los insurgentes la ventaja en el conflicto. Las denuncias de detenciones arbitrarias se mantienen; los medios locales reportaron alrededor de 130 capturas de presuntos colaboradores de las FARC solo en julio y agosto. Los videos obtenidos por InSight Crime también muestran a los soldados obligando a los residentes a salir de sus casas, diciendo que eran usadas por “amigos de los terroristas”.

A pesar del precio que ha pagado, Maduro parece decidido a restablecer el orden y el balance de poder que hizo tan rentable la alianza FARC-Chavista para ambas partes durante tantos años. Las comunidades de la región fronteriza, entre tanto, se preparan para que otra ola de la guerra en Colombia golpee a Venezuela.

“[El Frente 10] no quiere luchar, pero dicen que si el estado se vuelve loco, ellos van a responder. Estas personas ya están preparadas y las cosas pueden ponerse aún más feas que la última vez”, declaró a InSight Crime un residente de La Victoria, que no quiso identificarse por temor a las represalias.

4

Las repercusiones de Apure y el enemigo interno



La guerrilla colombiana ganó una batalla contra el ejército venezolano en el estado Apure. Pero nunca ganarán la guerra. No obstante, los combates dejaron algo en claro: el Estado venezolano no puede controlar las fuerzas criminales que ha tolerado por tanto tiempo.

La batalla entre las disidencias del Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército venezolano, puso al descubierto una realidad importante. Los movimientos políticos que alguna vez estuvieron unificados, tanto dentro del Estado venezolano como dentro de la guerrilla, se han degenerado para caer en rivalidades entre facciones y competencias por las economías criminales. El resultado es una inestabilidad y violencia en continuo aumento.

Si los combates en la región fronteriza y las violaciones a los derechos humanos que se derivaron de ellos fueron una pequeña muestra del conflicto civil colombiano en territorio venezolano o una señal de lo que les espera, eso está por verse. De cualquier forma, el conflicto seguramente tendrá un impacto perdurable en la dinámica política y criminal de Venezuela.

Para el presidente Nicolás Maduro, la decisión de emprender una intervención militar a gran escala en Apure ahora parece una manifestación de soberbia. Puso en evidencia las limitaciones del ejército y las fuerzas de seguridad bajo su mando, y esto no habrá pasado desapercibido para sus rivales, en su país y en el exterior, en el campo político y criminal. Y quizá el aspecto más lesivo para Maduro es que habrá deteriorado su legitimidad con el mismo ejército. Se enviaron tropas a morir en el campo de batalla en lo que parece haberse tratado de una campaña para beneficiar al presidente y a sus aliados en lugar de hacerlo en defensa del país. Maduro depende del ejército para mantenerse en el poder, y si sus soldados y generales no están dispuestos a luchar sus batallas por él, puede verse cada vez más vulnerable.

Sin embargo, Maduro y su facción política tuvieron algunas conquistas. Con la excusa de depurar las tropas del ejército de colaboradores con el Frente 10 y de los responsables de los fracasos en Apure, varios altos oficiales castrenses **han sido detenidos o degradados**. En su lugar, **Maduro** puso a aliados leales en estos cargos y reforzó su control sobre las fuerzas armadas, lo que reproduce **sus intentos** de designar a partidarios del régimen en cargos políticos claves para apuntalarse con fuerza en el poder.

El conflicto también ha ahondado las desavenencias entre facciones de las ex-FARC mafia. Los episodios de Venezuela seguramente aceleran un proceso que es **ya evidente en Colombia**, donde los remanentes de la insurgencia desmovilizada se están congregando en torno a dos polos de poder rivales y opuestos. Ambos se reivindicán el derecho a llevar el nombre FARC, pero se asemejan cada vez más a organizaciones narcotraficantes que a ejércitos insurgentes.

Por un lado está la red de disidencias comandada por Miguel Botache Santillana, alias “**Gentil Duarte**”, que tiene poderío militar, extenso control territorial y cierta credibilidad revolucionaria en el terreno, pues rechazó el proceso de paz desde el comienzo. Por el otro lado, está la **Segunda Marquetalia**, que cuenta con célebres comandantes con importantes conexiones en la política y el narcotráfico, pero con poco poder militar. Sus líderes cargan el estigma de los fracasos del proceso de paz que negociaron con el gobierno colombiano. El panorama se complica aún más con la presencia de numerosas **células de antiguos miembros de las FARC**, pequeñas y autónomas.

En Venezuela, el Frente 10, aliado de Duarte, cobró una victoria importante, que puso de relieve su pericia militar y el apoyo de la comunidad en la región limítrofe, y envió un claro mensaje de que cualquier futuro intento de sacarlos les costará caro. Pero la persecución estatal contra el Frente 10 parece abocada a mantenerse, y el grupo, acostumbrado a operar en Venezuela con casi total impunidad, ahora se encuentra en terreno hostil.

Para la Segunda Marquetalia, la victoria del Frente 10 representa un contratiempo. Su rival en Apure ha demostrado su fuerza, mientras que sus antiguos camaradas alzados en armas en toda Colombia **han culpado públicamente** a la Segunda Marquetalia del

conflicto, y han denunciado a sus cabecillas como traidores de la revolución. Esto se agravó más adelante con el [presunto asesinato](#) de uno de los principales líderes del grupo, Seuxis Pausias Hernández Solarte, [alias “Jesús Santrich”](#), en el estado venezolano de Zulia en mayo de 2021. La pérdida de Santrich no solo fue un golpe a la estructura de mando del grupo, sino que además sugiere que los comandantes de la Segunda Marquetalia ya no están completamente seguros en Venezuela.

Aun así, el hecho de que el ejército venezolano atacara al mayor rival de la Segunda Marquetalia en Apure, mientras dejaban intactos sus intereses y a su personal es un fuerte indicador de la sólida posición del grupo en Venezuela. Además de eso, en medio del conflicto, el excomandante de las FARC y uno de los narcotraficantes más renombrados de la guerrilla, Géner García Molina, [alias “John 40”](#), apareció en los videos de la Segunda [Marquetalia](#) y firmó su nombre en los comunicados. Hasta ese momento, se había considerado a John 40 parte de la comandancia central de las disidencias de Duarte. Su respaldo público a la Segunda Marquetalia representa un importante espaldarazo al grupo, en especial para sus redes de narcotráfico.

Puede decirse que el grupo guerrillero más favorecido por el conflicto ha sido el que menos hizo: el Ejército de Liberación Nacional ([ELN](#)). Aunque hubo [algunas denuncias](#) de que el ELN había respaldado al ejército venezolano para que interviniera contra el Frente 10, todas las fuentes consultadas en Apure dejaron en claro que estas guerrillas se contentaban con sentarse detrás de la barrera durante los conflictos. Como tal, han asistido al debilitamiento de sus rivales sin arriesgar nada.

Cuando el presidente Hugo Chávez invitó por primera vez a los insurgentes a Venezuela, hizo con ellos un pacto fáustico. Se hizo a un aliado poderoso para su “Revolución Bolivariana”, que logró apuntalar para su beneficio político, estratégico y económico. Pero también invitó una potente fuerza armada sin garantías de que podría controlarla. Aunque la era Chávez ya se está borrando de la memoria, Venezuela seguirá pagando el precio de la negociación del caudillo.



InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.

Cumplimos esta misión:

- Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región;
- Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los derechos humanos, el gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;
- Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto, sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
- Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando, traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más amplia;
- Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado;
- Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno.

Para más información, visite es.insightcrime.org
O contáctenos a: info@insightcrime.org